

## LA CONAIE EN EL OJO DEL HURACÁN DEL CORREÍSMO

Armando Muyolema  
University of Wisconsin, Madison

*Este artículo analiza uno de los últimos episodios de las tensas relaciones políticas entre el gobierno de Rafael Correa y las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador: la orden de desalojo de la sede histórica y política de la CONAIE. El análisis pone en perspectiva histórica los conflictos de coyuntura entre el estado y los pueblos indígenas y explica por qué el gobierno, que se define como de izquierda, quiere debilitar y destruir a uno de los actores políticos e históricos más fuertes y organizados de los movimientos sociales del país y de Abya-Yala.*

El 11 de diciembre del 2014, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, notificó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el fin del comodato de una casa que dicha organización ha venido ocupando desde su fundación, a mediados de los 80 del siglo pasado. Se trata de una casa de propiedad del estado que el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja entregó a esta organización en el marco de las negociaciones políticas gobierno-pueblos indígenas que tuvieron lugar como respuesta al Levantamiento indígena de 1990.<sup>1</sup> En esa carta también se estableció un plazo de 15 días laborables para que la sede socio-organizativa y política de la CONAIE, sea desocupada.

En el transcurso de los días, la posibilidad de un inminente desalojo de la casa de la CONAIE, por decisión unilateral del correísmo,<sup>2</sup> ha convocado una inmensa solidaridad nacional e internacional. Diversas organizaciones de la sociedad civil como también ciudadanas y ciudadanos de distintos lugares del mundo han hecho llegar sus pronunciamientos tanto a los líderes de la organización como al gobierno. Es de esperar que las diversas formas de solidaridad expresadas, sirvan de aliento y sean capitalizadas adecuadamente por los líderes, en todos sus niveles. Esta sería la mejor manera de expresar nuestra gratitud colectiva a esas voces solidarias que representan también trayectorias de lucha y compromiso para transformar las condiciones de vida en sus espacios vitales.

En un primer momento, por estrategia o por temor, la acción de desalojo fue diferida pero no resuelta. Sin embargo, aunque el MIES se puso el plazo de dos meses para tomar una decisión final, el pronunciamiento presidencial de última hora ya hizo pública su decisión: "no pueden seguir con ese local" porque realizaron actividades políticas, lo cual "era prohibido" (*El Universo*, martes 6 de enero 2015). Como ya se ha hecho costumbre en Ecuador, desde hace ocho años la palabra del presidente es la ley. La intervención de los jueces se ha reducido a un simple trámite formal. Esta es una verdad abrumadora que negarla sería como querer tapar el sol con un dedo. A estas alturas ya no cabe, entonces, ninguna esperanza de un eventual diálogo y menos aún de una posible reconsideración del desalojo.<sup>3</sup> Adicionalmente, desde el movimiento oficialista Alianza País, se ha puesto en marcha la creación de una organización indígena paralela y afín al gobierno, poniendo a su servicio las instituciones del estado como el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CODENPE.<sup>4</sup>

En este contexto, y superado el primer *round* por lo que se ha dado en llamar ya la “Casa de todxs”, la lucha continúa tanto en el ámbito jurídico –a sabiendas de un resultado negativo previsible– como también desde la movilización social, la razón histórica y la fuerza política de la solidaridad. Y la acción de continuar no indica un punto de partida en este momento sino las luchas en la “larga duración”; pues, las tensiones y regresiones vividas frente al correísmo van, sin duda, más allá de esta coyuntura y es necesario, por tanto, hacer memoria y mirar en perspectiva de la historia reciente la disputa política que ha tenido el gobierno de la “revolución ciudadana” con los pueblos indígenas, especialmente, con aquellos representados en la CONAIE. Señalar esas tensiones históricas operadas por el correísmo es el objetivo de este breve texto.

### ***El movimiento indígena en perspectiva histórica***

A finales de la década de los 90, aquejados por las devastadoras políticas de ajuste neoliberales implantadas en América Latina, como un evidente balance desolador se hablaba de una “década perdida”. En contraste, mirando desde las luchas y logros políticos de los pueblos indígenas durante el mismo período histórico, se hablaba de una “década ganada”. Y había buenas razones para este diagnóstico optimista. A mediados de la década de los 80, en pleno gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), uno de los regímenes más autoritarios y represivos de la segunda mitad del siglo XX, se constituyó la CONAIE, la que a su vez vendría a ser una de las organizaciones indígenas más influyentes del siglo, tanto por la estructura organizativa de sus bases sociales como por la profundidad y los alcances de sus propuestas políticas que apuntaban, especialmente, a las cimientos coloniales del Estado-nacional, como la

causa estructural de todas las formas de injusticia vigentes. Aunque los cientistas sociales suelen ubicar el origen de esta organización en la década de los 80, fundamentalmente, como una lucha contra las políticas neoliberales, es preciso hacer dos señalamientos significativos para ubicar su genealogía política más allá de la coyuntura actual. Ejercicio por demás necesario para remarcar que las luchas jurídicas de los pueblos indígenas de los Andes han sido, históricamente, en palabras de Steve Stern, “luchas por la solidaridad” (21).

Por un lado, el período post-reforma agraria que cobró impulso y concreción definitiva a inicios de la década de 1970, creó las condiciones para la expansión de los procesos organizativos y de lucha de los movimientos campesino-indígenas de base. Estos procesos organizativos, situados localmente pero con una clara conciencia de ser parte de una “comunidad imaginada” más amplia, venían desde las postrimerías del siglo XIX, como luchas que planteaban una nueva relación con el estado nacional después de la rebelión y derrota de Fernando Daquilema (1873), en el centro del país. Sin pretender desarrollar esta hipótesis en este texto, se puede afirmar que la rebelión y la derrota de Daquilema, fue el único intento de instituir una comunidad política por fuera y en contra del estado-nacional ecuatoriano. Fue claramente un proyecto político “separatista” desde el punto de vista de la “historia nacional” ecuatoriana. Sin embargo, esa derrota pronto se transformó en un replanteamiento estratégico de la relación con el estado nacional. Así, de una visión del estado nacional como una exterioridad hostil se pasó a considerarlo un objeto de disputa política consciente en el que debía haber un lugar para los pueblos indígenas y para otros colectivos subalternos. Rastrear en esta perspectiva la genealogía de los discursos y los silencios de las voces indígenas, es un desafío apasionante. En ese horizonte, se puede sugerir aquí que ese posicionamiento y los

cambios de mirada que esto implicó, se tradujeron en dos estrategias de acción política, a saber: la búsqueda de alianzas políticas interculturales (con el liberalismo triunfante y luego, a lo largo del siglo XX, con las izquierdas partidistas), y en la mimesis del lenguaje posible de la época: los discursos de la “forma-clase”, el sujeto campesino, por sobre la “forma-etnia”, como posicionamientos políticos concretos y como búsqueda de justicia social. ¿Cómo podemos interpretar si no es de esta manera el inesperado y masivo apoyo a las tropas liberales por parte de una muchedumbre indígena liderada por Alejo Saez, en la misma región donde apenas dos décadas antes fue derrotado Daquilema, apoyo que decidió la batalla de Gatazo a favor de Eloy Alfaro? ¿Cómo entender de otra manera las alianzas estratégicas con las izquierdas y la iglesia progresista de las organizaciones campesino-indígenas de base a lo largo de todo el siglo XX? Las estructuras fundacionales del estado-nacional fueron cuestionadas y su reconstitución reclamada y disputada en términos políticos.

Explorar esta hipótesis, situándola en los avatares políticos nacionales y mundiales, a lo largo del siglo XX, nos llevará a establecer la compleja historia política del movimiento indígena contemporáneo, la legitimidad de sus derechos, pero sobre todo, a desvirtuar, en esta coyuntura histórica y política, la vieja falacia de la tesis del separatismo indígena revivida con fuerza en los discursos políticos del correísmo.

Por otro lado, la agenda inicial de la CONAIE que sintetizó y movilizó a las organizaciones comunitarias de base (*grassroots movements*), en una dinámica histórica de abajo hacia arriba, se estructuró sobre tres demandas sustantivas: tierra, cultura y autodeterminación. En el contexto de los debates y acciones por el Quinto centenario de la colonización europea de Abya-Yala, estas demandas buscaban re-articular los territorios y las formas culturales propias

bajo una autonomía política que permite tener un control sobre el devenir de los pueblos indígenas. Una conciencia colectiva del colonialismo interno presidió las lógicas organizativas de rearticulación comunitaria y recuperación de la tierra y precedió a las críticas a las políticas neoliberales que cobraron fuerza en la medida que la organización ganaba legitimidad y una representatividad transcultural e “inter-étnica”. Lo que se percibía y vivía desde las experiencias colectivas de los pueblos era la dominación cultural, la explotación económica, la discriminación social y la opresión política no solo como individuos sino como pueblos. Fue desde esta visión que aquellas tres demandas se tradujeron en una demanda política central: la fundación de un nuevo orden estatal plurinacional que suponía, a su vez, la utopía de una relación intercultural equitativa donde todos los pueblos indígenas representados como “nacionalidades” tuvieran un control sobre sus prácticas, sus recursos y sus formas de vivir, incluyendo sus sistemas normativos, sus instituciones y sus sistemas económicos.

Estas demandas tuvieron énfasis e intensidades diferentes histórica y geográficamente. Hasta 1992, la consigna fundamental que determinó prolongados momentos de tensión en el campo fue: “1992, ni una hacienda más”, evidenciando con esto no solo las luchas por la recuperación de la tierra sino las limitaciones de una reforma agraria dirigida desde el estado. No obstante, la idea, el interés y las políticas culturales tuvieron también un lugar sostenido por lo menos, de una manera visible, desde las escuelas indígenas de Cayambe, apoyadas por Dolores Cacuango y la izquierda comunista, desde la década de 1940, pasando luego por la inclusión de la idea de una “educación propia” en los estatutos y las agendas del ECUARUNARI (Confederación Kichwa del Ecuador), de la Federación Shuar, de la CONAIE, hasta la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, en noviembre de 1988.

Tanto la historia socio-organizativa de la CONAIE como la formulación de sus demandas ha sido el resultado de un proceso de acumulación política de las experiencias de lucha y de las alianzas estratégicas con distintos actores de la sociedad a lo largo del siglo XX. Para una de las más grandes organizaciones sociopolíticas que definió el heterogéneo movimiento social ecuatoriano, esas largas luchas implicaron no solo un sentido de continuidad en la larga duración sino también procesos de interpretación y re-interpretación continuas tanto de los sentidos de sus propias demandas como también de las cambiantes “condiciones de decibilidad” (Laclau 1985), nacionales e internacionales. Esta capacidad intelectual y política, de movilizaciones y de luchas de la organización, convirtieron al levantamiento indígena de junio de 1990, en un evento que marcó un antes y un después tanto en términos políticos, al alimentar un imaginario social progresista –para no decir solo de izquierdas–, como también en términos epistemológicos al obligar a la academia a repensar conceptos clave como la ciudadanía, el sentido de la cultura y la interculturalidad, el estatus de las lenguas y la educación bilingüe, la relación con la naturaleza, la justicia social y la “condición multisocietal” (Tapia 1994), lo que ha implicado re-pensar la naturaleza misma del estado, como el marco institucional y el universo normativo que debía dar concreción y expresión a todos los conceptos señalados.

Este esquemático panorama histórico es de fundamental importancia para entender el resurgimiento y la concreción de proyectos de izquierda y sus posibilidades de éxito político dentro de los parámetros de la democracia representativa en los albores del siglo XXI. La CONAIE, como una de las organizaciones sociales más representativas y más novedosas de la segunda mitad del siglo XX, como proceso social de luchas y elaboración creativa de propuestas

que surgieron en la larga duración, representa no solo una contribución pacífica a la democratización de la sociedad en su conjunto sino también, lo que es muy importante, la condición de posibilidad del triunfo electoral de Alianza País, en el 2007, cuyo discurso de la “revolución ciudadana”, su Plan de gobierno, se articuló sobre las demandas fundamentales desarrolladas y colocadas en el debate público y defendidas por la CONAIE, desde su fundación. Sin los movimientos sociales presididos por la CONAIE el resurgimiento y las utopías de izquierda habrían sido impensables en el contexto político ecuatoriano; pues, mientras el desencanto, la desorientación política y una inevitable desbandada de cuadros izquierdistas tenía lugar en el país y en la región a raíz de la caída del muro de Berlín, en el contexto ecuatoriano, la CONAIE llegó a encarnar una utopía posible y a agrupar a su alrededor a lo más selecto y lúcido de la izquierda nacional; adhesión que no se reducía a un respaldo o simpatía por sus líderes sino, sobre todo, a una comprensión de sus procesos de luchas colectivas y de la novedad y profundidad de las transformaciones propuestas en todos los órdenes de la vida en sociedad. Nada providencial había detrás de la articulación del discurso político basado en la idea de “revolución ciudadana”. Todo lo contrario, durante la primera década del siglo XXI, había un proceso político maduro favorable a las tendencias progresistas e izquierdistas. De manera que, como sucedió con el movimiento que llevó al poder al coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), el gobierno de la “revolución ciudadana” llegó al poder montado en las olas de las luchas sociales y aprovechando de un imaginario colectivo afín a las nuevas izquierdas que crecían en las calles y que enarbolaban ideas y propuestas derivadas de las preocupaciones más actuales de las sociedades pero, sobre todo, de los sectores populares fogueados en las luchas



contra las políticas del neoliberalismo y de los pueblos indígenas fuertemente posicionados en una crítica profunda a los legados coloniales encarnados en la estructura de Estado.

### ***Más allá de la casa: la CONAIE como memoria y resistencia***

Desde este trasfondo histórico brevemente descrito, la actual disputa política con el gobierno de la “revolución ciudadana”, no es menor ni se reduce al dominio de una casa. Las cuestiones de fondo son mucho más serias y profundas. Más allá de las críticas a los dirigentes de coyuntura –una de las constantes que liga al correísmo con todos los gobiernos del pasado–, la disputa real ni siquiera se reduce a las históricas tensiones entre pueblos indígenas y el estado nacional o, más en rigor, a la disputa por ganar un lugar en el orden estatal, transformándolo. Lo que realmente está en juego en esta coyuntura histórica es el tipo de sociedad y la naturaleza misma del estado, en tiempos de una beligerante “revolución” que existe más en la superficie discursiva, en el caos y en la propaganda que en la movilización crítica y participativa de la sociedad. El correísmo, movimiento fáctico que se sostiene en la confluencia discursiva de la “revolución ciudadana” y el “socialismo del siglo XXI”, quiere destruir la utopía de una sociedad plural y genuinamente democrática, asentada en referentes civilizatorios alternativos. La disputa política no se limita, en fin, a la organización de lo “étnico” en el orden político de lo “nacional”; más allá de esa imagen liberal de las “naciones dentro” que acota y delimita los discursos de lo “étnico”, está en disputa una sociedad donde exista un lugar y un futuro de equidad para todos y todas.

Las relaciones que las sociedades establecen con el tiempo y sus representaciones son fundamentales en la estructuración de las jerarquías sociales y culturales. La misma idea de un socialismo del siglo XXI, implica una disputa por la contemporaneidad en el orden político

global donde el neoliberalismo proclamó (apresuradamente) el “fin de la historia”, colocándose a sí mismo como el marco deseable de las sociedades y condenando a los proyectos alternativos al pasado. El socialismo lucha por su lugar en el presente y en el futuro diferenciándose y renegando de sí mismo en términos temporales: es socialismo, pero del siglo XXI. No obstante, en el contexto ecuatoriano el uso político del tiempo ha servido para la construcción de jerarquías sociopolíticas a nivel interno. El uso ideológico de la contemporaneidad es una estrategia situada en la lucha política local. Así, desde el locus temporal del siglo XXI, el correísmo ha sido prolífico en descalificar a las voces críticas y disidentes. La imagen emblemática y con una densa historia colonial es la niñez. El correísmo en su virtud maniquea y disociadora se define en oposición a la “izquierda infantil”, al “ecologismo infantil” y al “viejo país”. Como en ese pasado solo existen voces críticas, memorias/historias colectivas y posiciones disidentes, los discursos revolucionarios buscan “inventar una tradición” liberadora. De este modo, con la mirada en la larga duración, el correísmo pretende borrar la historia de las luchas populares o re-escribirla ya sea apropiándose de sus símbolos, de sus figuras, o creando en el presente protagonistas a su medida (como aquellos de la “Alianza indígena por la revolución ciudadana”,<sup>5</sup> en marcha ahora mismo), sin ninguna trayectoria, pero sí funcionales al simulacro participativo de la “revolución”. Por tanto, el pretendido desalojo de la casa, representa también un despojo simbólico que se inscribe dentro de las políticas de la memoria y del olvido generadas desde el heteróclito locus del correísmo. Después de todo, los otrora dirigentes y aliados del movimiento indígena, saben que las luchas de la CONAIE y su reticencia (“miopía histórica”, dicen ellos) hacia la “revolución ciudadana”, más allá de las críticas al accionar político de sus líderes, representa para el oficialismo por lo menos tres

fundados temores: i) la amenaza de un espacio de resistencia organizada indiscutible, puesto que esta es una de las pocas organizaciones que no ha sido sometida, anulada, domesticada, subsumida ni absorbida en el movimiento oficialista; ii) el pavor a verse en un espejo que muestra las fronteras, los límites y la superficialidad –caótica en muchos casos– de sus políticas y acciones así como también las profundas contradicciones entre los discursos y las prácticas concretas: el “buen vivir” y el extractivismo minero; el radicalismo de izquierda y la persecución y el encarcelamiento a los luchadores sociales; el asedio mediático a los sindicatos y a las organizaciones de la sociedad civil críticas; un discurso celebratorio de la interculturalidad y el monoculturalismo de las políticas públicas, de la educación, del currículo, etc.; y, claro, iii) el temor a la memoria viviente de las luchas y utopías de amplios sectores populares que han confluído en esa zona de contacto político intercultural que ha sido esta organización, que no ha podido ser colonizada ni desarticulada.

Y digo esto no por una arrogante adhesión a la CONAIE, sino porque esta organización, consciente o inconscientemente, ha sido vista desde el oficialismo no solo como un nicho de resistencia “miope” y “fuera del carro de la historia”, según ellos, sino –a juzgar por sus propios discursos y ataques sistemáticos e intensos– como la encarnación de todas las conquistas logradas por los pueblos indígenas durante las últimas décadas. Esto es irónico porque al enfocarse en destruir las bases organizativas y simbólicas de la CONAIE, olvidan los aportes de otras organizaciones sociales con respetables historias de lucha, que no se salvan de esta omisión anuladora ni siquiera por su apoyo incondicional al correísmo.<sup>6</sup> No se puede entender de otra manera los intensos ataques, cuestionamientos y asociaciones reduccionistas y perversas –como se notó en la campaña de deslegitimación y desacreditación estatal a la EIB

(Educación Intercultural Bilingüe)–, entre el accionar de la CONAIE –es decir, el supuesto o la interesada asunción oficial del ilimitado poder y el “control total” de instancias estatales por parte de esta organización!–<sup>7</sup> y los resultados conseguidos por las instituciones del estado encargadas de las políticas y acciones orientadas a los pueblos y nacionalidades indígenas (v.g. la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB; la dirección de salud indígena o el mismo Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades Pueblos del Ecuador, CODENPE).

Desde la perspectiva oficial, la gestión de estas instituciones ha sido, claramente, un fracaso porque, según los voceros del gobierno, han estado bajo el “control total” de la CONAIE, aunque todas esas instancias han sido siempre parte de la estructura del estado. Se ha magnificado la relación entre la CONAIE y las instituciones estatales “étnicas” para resaltar la negatividad de su influencia. En otras palabras, los ataques a la CONAIE y a sus estructuras organizativas, obedecen a una estrategia oficial que va más allá del intento de desarticulación de esta organización. La CONAIE está en el ojo del huracán porque, según los demonios internos del correísmo, destruir a esta organización representaría para el oficialismo la desestructuración y el desmantelamiento sistemático y definitivo de las narrativas de la interculturalidad, la plurinacionalidad, el plurilingüismo y el modelo económico más amigable con la naturaleza, como narrativas críticas postcoloniales. Pero también se pretende la destrucción de los contenidos, las formas institucionales y los fundamentos históricos y culturales que dan sustento a tales narrativas, mismas que han cuestionado el orden estatal por sus bases políticas, jurídicas y epistémicas. En el intento de posicionar una narrativa revolucionaria, la CONAIE representa una negación radical de las políticas culturales del correísmo, consistente en la apropiación y el uso folclórico y *light* de conceptos y prácticas

fundamentales como el de interculturalidad, reducida al uso de vestimenta estilizada, al simulacro de hablar quichua y la monumentalización de los líderes indígenas del pasado. De esta manera, el pretendido desalojo de la casa, más allá de la legalidad y los loables objetivos esgrimidos por el oficialismo, hay que entenderlo dentro de esta disputa soterrada y más profunda que tiene que ver con el sentido de las transformaciones y el tipo de sociedad deseable: la utopía de una sociedad postcolonial, post-patriarcal y post-desarrollista donde quepan todos y todas en términos de equidad y de justicia.

El correísmo no pretende destruir a la CONAIE en sí misma sino todo lo que ella representa en relación a los pueblos y nacionalidades indígenas y a la sociedad en general. La CONAIE precede y trasciende a sus liderazgos coyunturales. Como un proceso que surgió desde abajo hacia arriba tiene una fuerte raigambre social y comunitaria. Proceso que en algún momento desbordó las expectativas de los pueblos indígenas para alimentar la imagen de un país distinto. Por esta razón, la existencia de esta organización le recuerda al correísmo lo poco que se ha logrado y lo mucho que está por hacerse en relación a la construcción de un nuevo orden estatal, a una nueva ciudadanía, a una nueva forma de vivir en sociedad; está allí para recordarle y mostrarle sus límites. Este poder fáctico y práctico en el sentido de intervenciones reales en la sociedad, se despliega contradictoriamente en acciones que niegan a los discursos o que convierten a los discursos en máscaras para encubrir lo que realmente se hace.

Esta estrategia esquizofrénica quiere destruir los pocos logros y conquistas de los pueblos indígenas alcanzados en décadas de luchas y movilizaciones como es el caso de la educación intercultural bilingüe (EIB). Cuestionando y estigmatizando sus acciones, el oficialismo espera convertir en tabú todos los proyectos e ideas asociadas con la CONAIE y

propiciar una desmemoria de la lucha social, porque la “revolución ciudadana” reniega de la historia; una ecuación simplista y maniquea cancela la historia como acción política y como luchas: pasado es igual a la “larga noche neoliberal” aunque gracias a las grandes movilizaciones de los pueblos indígenas y de los sectores populares el neoliberalismo no se instaló en Ecuador con la misma fuerza devastadora que en otros países. Renegar de la historia de las luchas sociales de décadas y confiar las decisiones de gobierno a un núcleo de tecnócratas y de mutantes políticos (otrora claramente conservadores ahora rabiosos izquierdistas retóricos) sugiere la imagen de una “*alien revolution*”, no en el sentido del signo de lo extraño y extranjero, sino sobre todo, en sentido de negación del pasado; una “*alien revolution*” que llegó para fundar todo, para establecer el principio, monumentalizando una que otra ruina o personaje ilustre que le parece significativo como la figura de Eloy Alfaro, el líder de la revolución liberal de fines de fines del siglo XIX o la idea del “*sumak kawsay*” que, disociada de la lengua de origen, parecería ser el único sintagma que queda de una civilización perdida: se celebra la potencia creadora de esta frase pero se evita explorar con más profundidad en las tramas de la lengua de origen y las prácticas de vida de sus hablantes; se atribuye a esta única frase el poder de un paradigma alternativo, pero nada se ha hecho en términos de políticas lingüísticas para revitalizar la lengua en cuyo seno el *sumak kawsay* adquiere sentido práctico y densidad cultural. Así, esta se piensa no como una revolución que libera sino como irrupción política que funda. Hasta el mesianismo, redentor en su definición política, pierde todo sentido frente a la ilusión fundadora de la “revolución ciudadana” y de sus huestes operativas, que actúan sobre hermenéuticas propias derivadas de la gran narrativa del

“socialismo del siglo XXI”. En este marco, la CONAIE estorba porque es historia viviente y precede históricamente al arribo de los fundadores.

### **Conclusión**

En fin, queda mucho por reflexionar y debatir internamente y hacia afuera y desde fuera, aunque este afuera y desde afuera sea, ciertamente, algo difuso, debido, precisamente, a las ricas y complejas zonas de contacto intercultural que se han dado con el tiempo y por las utopías comunes. Asistimos, sin duda, al despliegue de una de las formas políticas más sofisticadas de extractivismo, a un extractivismo que no se reduce a su sentido convencional de extracción minera. Podemos hablar también de un intenso extractivismo simbólico que consiste en la apropiación de discursos, de símbolos y de conceptos fundamentales de las culturas y pueblos indígenas y de colectivos o de figuras históricas contestatarias. El uso y abuso de la vestimenta o de conceptos como el “*sumak kawsay*” son ilustrativos de una práctica política mucho más profunda de extractivismo simbólico y suplantación política.

El desalojo de la casa de la CONAIE es un despojo que se inscribe dentro de las políticas de destrucción sistemática de los espacios de resistencia cultural que incluye, el desmantelamiento sistemático de la educación intercultural bilingüe (EIB), otro de los núcleos duros de rearticulación, recreación y resistencia cultural de las últimas décadas; la militarización de las comunidades para proteger a las compañías mineras como el caso de Intag, en el norte del país; la comprensión *light* de la interculturalidad, es también una forma de extractivismo simbólico que supone la inclusión abstracta y la exclusión concreta de la materialidad de las luchas sociales y de sus protagonistas individuales y colectivos.

El socialismo del siglo XXI se reduce al correísmo, a la figura de un héroe fundador y al efecto socialmente multiplicador de las narrativas fundacionales. No existe solo el verticalismo de discursos y prácticas autoritarias que fluyen a través de las instituciones públicas bajo las formas de la comunicación oficial (decretos, resoluciones, memorándums); hay también procesos de multiplicación de prácticas y discursos que se generan y se diseminan en la sociedad de boca de una militancia “orgánica” que exhibe y actúa sobre una hermenéutica propia de los conceptos clave del oficialismo, siempre más acordes a la materialidad concreta de las luchas de poder y de los intereses de grupos.

El carácter esquizofrénico del correísmo que genera políticas y prácticas que contradicen sus discursos, está siendo una pesadilla política para los pueblos indígenas, para las comunidades y colectivos que creen y quieren ejercer una ciudadanía crítica. El miedo al escarnio público y al “linchamiento mediático” ciertamente no tiene precedentes en la historia reciente. Y ya se habla de la necesidad de volver “irreversible” la revolución, como que la duración en poder fuera garantía suficiente. La historia nos recuerda que las transformaciones sin sociedad y sin raigambre institucional, son vulnerables y reversibles.

En fin, no hay posibilidades de cambio de rumbo en el horizonte. No hay nada más ajeno al gobierno que la opción del diálogo. Mientras los ideólogos de esta *sui generis* revolución-sin-sociedad piensan que un cambio político sería el fin de la historia, para los condenados y ofendidos por el correísmo sería el inicio de otras historias. Bajo un horizonte político distinto podríamos contar nuestras historias después del socialismo del siglo XXI realmente existente,



sin renunciar, claro está, a las luchas porque como dijo Walter Benjamin: “ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence”.

### **Obras citadas**

- “Alianza indígena por la revolución”. *El Telégrafo*. 24 de diciembre, 2014.
- “CONAIE pidió al gobierno que desista del desalojo”. *El Universo*. Martes 6 de enero, 2015.
- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe. *Hegemonía y estrategia socialista*. Madrid: Siglo XXI, 1985.
- “Oficialismo construye alianza indígena paralela a la Conaie”. *El Universo*. Viernes, 2 de enero, 2015.
- “Organizaciones proponen alianza indígena por la Revolución Ciudadana”. *El Telégrafo*, 23 de diciembre, 2014.
- Stern, Steve. “Struggle for Solidarity: Class, Culture, and Community in Highland Indian America”. *Radical History Review* 27 (1983): 21-45.
- Tapia, Luis. *La condición multisocietal*. La Paz: Nariz del diablo, 1994.

### **Notas**

<sup>1</sup> Ver el “Mandato por la vida en Vida” Sánchez-Parga, José. *Presente y futuro de los pueblos indígenas: análisis y propuestas* (Quito: Ediciones Abya-Yala, 1992) 53. Este fue el documento que recogió las reivindicaciones de la CONAIE al estado ecuatoriano y la base de las negociaciones.

<sup>2</sup> Entre la “revolución ciudadana” y el “socialismo del siglo XXI”, prefiero usar aquí, intencionalmente, el término “correísmo”. El correísmo representa una tendencia que de facto es la negación absoluta de los conceptos de revolución, ciudadanía y socialismo. Es una emergente estructura de poder fáctico que no es solo la predominancia de un liderazgo autoritario sino la multiplicación, diseminación y reproducción de prácticas autoritarias y beligerantes en todos los niveles de gestión, en las instituciones y en sociedad; es la generación de imaginarios que reproducen una forma de gestión vertical y autoritaria en todos los niveles de la administración pública, basados en los discursos de la eficiencia, de los resultados (“gobierno de resultados” dicen las páginas oficiales) y en el poder mágico del eslogan: “el buen vivir”, “el cambio de época”, “el cambio de matriz productiva” o “el predominio del ser humano sobre el capital”, repetidos hasta el cansancio en la prensa “pública” al servicio del gobierno.

<sup>3</sup> Las razones jurídicas, históricas y políticas han sido ampliamente expuestas tanto por los líderes de la CONAIE como por distintas organizaciones solidarias, por personalidades y conocedores de la historia de esta organización (ver bibliografía).

<sup>4</sup> Ver “Alianza indígena por la Revolución Ciudadana con nuevos compromisos”. <http://movimientoalianzapais.com.ec/>

<sup>5</sup> Ver “Alianza indígena por la revolución”. *El Telégrafo*, 24 de diciembre, 2014.

<sup>6</sup> Esto es muy importante, pues, hasta las organizaciones que han apoyado incondicionalmente al gobierno desde sus inicios, han sido intervenidas y sometidas a la lógica y al mando estatal, con lo cual organizaciones respetables y con gran trayectoria histórica como la Federación Nacional de

organizaciones campesinas, indígenas y negras, FENOCIN, ha sido también debilitada y prácticamente ha desaparecido de la escena pública.

<sup>7</sup> En su momento se dio un amplio debate sobre la EIB. Ver por ejemplo, “Educación bilingüe se torna asunto político” (*Explored noticias del Ecuador*, 11 de enero de 2010). Web, <http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/educacion-bilingue-se-torna-asunto-politico-386674.html>